

# ECUADOR Debate<sub>109</sub>

Quito/Ecuador/Abril 2020

## Protesta social y desgaste de la democracia liberal



De la pandemia sanitaria al pandemio económico

La economía ecuatoriana, confronta diversas presiones contractivas

Conflictividad socio-política:  
Noviembre/2019 –Febrero/2020

El retroceso de la democracia: la experiencia ecuatoriana

El estallido social chileno: ¿crisis de un modelo neoliberal o crisis de la ideología del crecimiento?

La democracia colombiana en tiempos de movilización social ¿Manifestaciones de una crisis orgánica?

Excepción y contrarrevolución global

Democracias por venir y mundos por construir en el escenario posconflicto colombiano

Estallido social, crisis política y solución constitucional en Chile. Lecciones a partir de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019

La plasticidad de las estructuras comunitarias en los procesos de transformación del Ecuador rural

A propósito del tema: Estado y Nación en los pueblos amerindios

Maternalismo y política: Cynthia Viteri ¿“el hombre” o “la madre” de los ecuatorianos?

# ECUADOR **Debate**

## **CONSEJO EDITORIAL**

Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, Simón Espinoza,  
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero

**Director:** Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP  
**Primer Director:** José Sánchez Parga. 1982-1991  
**Editora:** Lama Al Ibrahim  
**Asistente General:** Margarita Guachamín

## **REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES**

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

© **ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR**

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

## **SUSCRIPCIONES**

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 51

ECUADOR: US\$. 21

EJEMPLAR SUELTO EXTERIOR: US\$. 17

EJEMPLAR SUELTO ECUADOR: US\$. 7

## **ECUADOR DEBATE**

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Tel: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caaporg.ec@uio.satnet.net

Redacción: Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre, Quito

## **PORTADA**

Gisela Calderón/Magenta

## **ARMADO E IMPRESIÓN**

Edwin Navarrete, Taller de Diseño Gráfico

ISSN: 2528-7761

ISBN: número 109: 978-9942-963-53-6



# ECUADOR DEBATE 109

Quito-Ecuador • Abril 2020

ISSN 2528-7761 / ISBN 978-9942-963-53-6

PRESENTACIÓN 3/6

## COYUNTURA

- De la pandemia sanitaria al pandemio económico 7/16  
*Alberto Acosta*
- La economía ecuatoriana, confronta diversas presiones contractivas 17/34  
*Wilma Salgado Tamayo*
- Conflictividad socio-política: Noviembre/ 2019 – Febrero/2020 35/39

## TEMA CENTRAL

- El retroceso de la democracia: la experiencia ecuatoriana 41/56  
*Pablo Andrade*
- El estallido social chileno: ¿crisis de un modelo neoliberal o crisis de la ideología del crecimiento? 57/80  
*Antonio Elizalde Hevia*
- La democracia colombiana en tiempos de movilización social  
¿Manifestaciones de una crisis orgánica? 81/107  
*Jorge Orlando Blanco Suárez*
- Excepción y contrarrevolución global 109/123  
*Marina Garcés*
- Democracias por venir y mundos por construir en el escenario posconflicto colombiano 125/137  
*Javier Tobar y José Gabriel Tobar*
- Estallido social, crisis política y solución constitucional en Chile. Lecciones a partir de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019 139/156  
*Octavio Avendaño y María Cristina Escudero*

## DEBATE AGRARIO-RURAL

- La plasticidad de las estructuras comunitarias en los procesos de transformación del Ecuador rural 157/172  
*Emmanuel Fauroux*

## **ANÁLISIS**

- A propósito del tema: Estado y Nación en los pueblos amerindios  
*Luis Oquendo* 173/195
- Maternalismo y política: Cynthia Viteri ¿“el hombre” o “la madre”  
de los ecuatorianos?  
*Mónica Mancero Acosta* 197/208

## **RESEÑAS**

- Moral y orden. La delincuencia y el castigo en los inicios  
de la modernidad en Ecuador 209/214
- La construcción imaginaria del Sur de Quito 215/218

# La democracia colombiana en tiempos de movilización social

## ¿Manifestaciones de una crisis orgánica?

Jorge Orlando Blanco Suárez\*

*Al recordar los acontecimientos de Noviembre 2019, ocurridos en Colombia, parecen no tener precedentes al no ser el Paro Cívico de 1977; aunque habrá que considerar que si bien hay algunas coincidencias, las manifestaciones recientes lograron una convocatoria inesperada y una fuerte represión por parte del gobierno. Para comprender el significado del “21N”, se analiza la crisis orgánica del “sistema político del clientelismo” y del “autoritarismo con elecciones”; los procesos de movilización social y, la pérdida de legitimidad del gobierno de Iván Duque.*

### Introducción

¿Cuál es el significado de las inmensas y sostenidas movilizaciones que se produjeron en Colombia a partir del 21 de noviembre de 2019 y hasta febrero de 2020? ¿Qué nos informan sobre el estado actual del régimen político y el proyecto democrático en este país? Para una adecuada interpretación de estas movilizaciones, se argumentará en este artículo tres elementos necesarios a tomar en cuenta. En primer lugar, analizar el contexto en el cual estas se produjeron y los modos en que siguieron su cauce. En segundo lugar, es importante establecer las relaciones entre este contexto y el marco general del desarrollo histórico del sistema político colombiano, al menos en una mediana duración. Finalmente, hacer un análisis de las movilizaciones en sí mismas, los actores que las convocaron y los que participaron, así como los desarrollos que estas tuvieron a partir del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019. Esto es, analizar sus dimensiones, impactos, las demandas que se visibilizaron y las perspectivas que abren para el futuro de la democracia colombiana.

En función de lo anterior se expondrá inicialmente lo que entendemos por este tipo de régimen político y las particularidades de su expresión actual e histórica en la sociedad colombiana. En segundo lugar, se describirá el marco dentro del cual se producen estas movilizaciones, esto es, el desarrollo del régimen político colombiano y la evolución de la coyuntura actual de fuerte debilitamiento del gobierno de Iván Duque (2018-2022), y de incremento de las movilizaciones sociales. En tercer lugar, se analizará brevemente el proceso de movilizaciones que se desarro-

---

\* Docente Asociado de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación, Proyecto Curricular de Ciencias Sociales. Miembro del grupo de investigación Amautas: Formación de sujetos y pedagogías críticas. Email: joblancos@udistrital.edu.co

llaron en Colombia a partir del 21 de noviembre de 2019, que han marcado, sin lugar a duda, un hito en la trayectoria de las protestas sociales en Colombia y pueden dar luces para pensar las luchas por el poder en el futuro próximo, con miras al fortalecimiento del proyecto democrático en Colombia.

En el análisis propuesto defenderemos tres hipótesis complementarias que buscan servir de base para comprender el significado del “21N” y su evolución posterior. En primer lugar, el sistema político colombiano, considerado por las élites como la democracia más estable y antigua de América Latina, que podría denominarse “autoritarismo con soporte electoral” (con altas dosis de violencia, fraude, clientelismo y corrupción), viene sufriendo un progresivo proceso de erosión. Este sistema, que desde finales de los años 80 fue catalogado como el “sistema político del clientelismo” (Leal y Dávila, 1990), encuentra cada vez más dificultades para sostenerse, con lo que la volatilidad electoral y la incertidumbre de las élites regionales primero, y luego nacionales, es cada vez mayor, abriendo las posibilidades para la emergencia y consolidación de nuevas fuerzas políticas o para la constitución de nuevas articulaciones entre actores políticos alternativos y sectores sociales subalternos. En segundo lugar, los procesos de movilización social vienen en una escala ascendente, resultado del fortalecimiento de algunos sectores sociales, como el movimiento estudiantil, campesino y, la reconfiguración del movimiento sindical, particularmente de docentes. En tercer lugar, la cada vez más evidente pérdida de legitimidad del gobierno de Iván Duque, debido a sus flagrantes mentiras de campaña a lo largo de su gobierno, y el de no impulsar reformas laborales y pensionales, así como la creciente violencia contra líderes sociales y los cada vez más alarmantes escándalos de corrupción,<sup>1</sup> completan el cuadro estructural como coyuntural, que enmarcan esta creciente ola de movilizaciones y las transformaciones del sistema político. Así, estas movilizaciones, pueden ser leídas como una manifestación más (una fuerte y esperanzadora), de la crisis orgánica del “sistema político del clientelismo” y del “autoritarismo con elecciones”.

## **La democracia en la Colombia contemporánea<sup>2</sup>** **¿Qué democracia?**

Como mencionamos arriba, regularmente se ha hablado de la democracia colombiana como una de las más estables de América Latina (Murillo y Osorio, 2007; Blanco, 2008, 2013; Vargas, 2015; Hernández y Echeverri, 2018).<sup>3</sup> Esta idea ha sido con frecuencia usada por las élites políticas del país, que han afirmado en dis-

- 
1. A las acusaciones de compra de votos para su campaña, se ha sumado la deslegitimación de un gobierno que ha mostrado claras señales de ineficiencia, improvisación y torpeza.
  2. Por democracia contemporánea entendemos aquella que comienza a edificarse a finales de los años 80 con los procesos de descentralización política y administrativa, con la elección popular de alcaldes a partir de 1988 y, principalmente a partir de la Constitución de 1991.
  3. En este honroso reconocimiento, habría compartido lugar con Costa Rica y Venezuela, al menos si se tiene en cuenta la segunda mitad del siglo XX.

tintos momentos de la historia, que esta es “tal vez...” “...la más sólida y estable” de América Latina. En un editorial del influyente diario *El Tiempo*, de Bogotá, el 4 de octubre de 1992, por ejemplo; a un poco más de un año de aprobarse la Constitución de 1991, en el que se comentaban los ires y venires entre democracia y dictadura en el continente se afirmaba que:

En nuestro muy amado hemisferio, las modas van y vienen. Sobre todo en política. Se pasa de una ola de dictadores a etapas de relucientes y admirables democracias. Producimos increíbles tiranos, pero a la par surgen hombres públicos de categoría civil, con perfiles extraordinarios, dignos de compararse con los mejores estadistas mundiales. *Colombia posee tal vez la democracia más sólida y estable de América. Los colombianos somos ajenos al sabor dictatorial, pero no podemos cantar victoria total en este variable estilo, que va, como los péndulos de los famosos relojes, de un lado para otro. El temperamento latino, con ribetes de trópico, imprime a los pueblos americanos la condición que mencionamos. Y como consecuencia, a sus sistemas de gobierno (El Tiempo, 4/10/1992).*

Esta lectura de la excepcionalidad colombiana (más allá de los determinismos culturales o geográficos que expresa el editorialista), que resalta la solidez y estabilidad de la democracia en este país, es uno de los sustentos míticos más importantes y de uso recurrente de las élites (y algunos académicos), para defender la estabilidad del régimen político colombiano frente a sus supuestos enemigos internos y externos. Bajo esta premisa es que las élites colombianas han visto su obra sólida, pero también vulnerable y siempre atacada por fuerzas internas y externas. Para estas élites, las amenazas internas están representadas principalmente, por las “amenazas terroristas”, la insurgencia armada, las fuerzas civiles de izquierda, los movimientos sociales y populares y, en menor medida los agentes del narcotráfico. Todas estas manifestaciones de oposición y resistencia, o fruto de gobiernos permisivos o cooptados por las mafias en distintos momentos, desde los años 80 (como el caso del narcotráfico), regularmente son asumidos como la misma cosa en el discurso público de estas élites. Las amenazas externas han sido representadas por el “comunismo internacional” y, más recientemente, por el “castrochavismo” y el “Foro de São Paulo” y su expansión latinoamericana (Blanco, 2008; Guzmán, et al., 2017; Bergquist, 2017; Ahumada, 2020; Duque, 2019; Gamboa, 2019). Así, se ha configurado una mirada maniquea de la política colombiana en la que los buenos, representados por la mayor parte de quienes ocupan el poder de Estado en sus distintas funciones, se enfrentan a los malos: aquellos que disputan el control del poder estatal y social por vías extrainstitucionales y no necesariamente ilegales (Rincón, 2002).

Ahora bien, en los estudios de caso y comparativos sobre la democracia colombiana, desarrollados por investigadores nacionales y extranjeros, la excepcionalidad de la democracia colombiana termina siendo más bien una paradoja (Murillo y Osorio, 2007). En esta se reconoce que las elecciones son el mecanismo permanente y estable a través del cual se accede al poder de Estado, pero se resaltan las

profundas falencias de la democracia electoral.<sup>4</sup> Al respecto, Javier Duque, uno de los autores que más ha estudiado los procesos electorales en Colombia en las últimas décadas, expone que, para definir a la democracia colombiana se ha recurrido a varios adjetivos negativos, en los que se resalta el carácter incompleto o limitado de la misma. Para este autor, desde 1991, se ha hablado de esta como una democracia “*asaltada, sitiada o asediada*; también como una *democracia mafiosa*”. En los trabajos de la década de los 90, resalta el autor, la idea de una democracia atacada por distintos enemigos (internos y externos), es compartida por distintos autores (Duque, 2012). No obstante, en los estudios comparados, describe Duque, los académicos se han referido a la democracia colombiana como “un caso de régimen semidemocrático, régimen ambiguo; democracia disfuncional, democracia sin ley, democracia defectuosa y democracia precaria. Una democracia con adjetivos negativos que en su dimensión electoral presenta como su principal atributo el fraude, las urnas contaminadas” (Duque, 2017: 16). Este mismo autor ya había llamado en un trabajo anterior al régimen político colombiano como “*subpoliarquía*”, dados los problemas de legitimidad y legalidad de los procesos electorales, la falta de respeto y protección de los derechos humanos, civiles y políticos y la estructural presencia de la violencia, corrupción y el clientelismo (Duque, 2012).

En todas estas miradas, algunas que exaltan la solidez de la democracia y otras un poco más críticas, se coincide en el reconocimiento del carácter democrático, así sea limitado o disminuido del régimen político colombiano. Ahora ¿En qué consisten estas limitaciones y cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo? ¿Está condenada la sociedad colombiana a la reproducción sin fin de una estructura política autoritaria y a una “democracia deficitaria”? Además de lo planteado por Javier Duque (2012, 2017, 2019, 2020), buena parte de los estudios que se centran en el componente procedimental de la democracia; esto es, en los procesos electorales que ha tenido Colombia en las últimas tres décadas y las dificultades de la oposición para actuar políticamente en un marco de justicia e igualdad encuentran que el fraude, el clientelismo, la violencia y la corrupción son marcas permanentes de la democracia colombiana. Dentro de este marco, si bien es cierto se reconoce la periodicidad de los procesos electorales, el problema de la calidad de estos ha sido puesto en evidencia (Murillo y Osorio, 2007; Guzmán, *et al.*, 2017; Duque 2012, 2017, 2019, MOE, 2018).<sup>5</sup> Así, es a partir de estas limitaciones a los

---

4. El historiador norteamericano David Bushnell, estudioso de la política colombiana del siglo XIX, llegó a afirmar que en Colombia, más que haberse caracterizado por la permanencia del recurso de la guerra para lograr interés político, ha sido un país de elecciones. No obstante, también planteó que el fraude y la violencia, como las características fundamentales de los procesos electorales.

5. Para otros autores, la democracia colombiana tiene dificultades no por sus diseños institucionales, sino por el comportamiento político de los actores, particularmente los actores ilegales como paramilitares, guerrilla y narcotraficantes (Cameron, 2010). Este tipo de estudios deja por fuera el comportamiento ilegal de los actores políticos legales y los modos en que actúan, a través de alianzas con actores ilegales, para capturar al Estado y sus recursos (Ávila, 2018; Duque, 2012; 2017).



procesos democráticos que se ha definido a esta democracia disminuida o una democracia deficitaria.

Desde esta perspectiva, la literatura más reciente sobre el estudio de la democracia en Colombia mostraría que, no obstante el hecho de que la Constitución de 1991 pretendió abrir el escenario político, fortalecer la participación ciudadana, la representación y la representatividad, los avances parecieran ser pocos, a casi 40 años de su promulgación. Si bien se reconoce positivamente la inclusión política de nuevos y diversos actores, también se cuestiona la dificultad para hacer el tránsito entre lo formal y las prácticas sociales, las dificultades para que estos nuevos actores tengan la posibilidad de desafiar el poder local y nacional de las elites políticas más tradicionales y de aquellas nuevas articuladas con aquellas (Murillo y Osorio, 2007; Guzmán, *et al.*, 2017).

Precisamente, para poder entender cómo es que se ha limitado la democracia colombiana, es que defendemos aquí la idea de que, estas limitaciones, no obstante estar en crisis, han sido la base de la estabilidad del régimen. Ya en un trabajo anterior había planteado el autor de estas líneas, la idea de que uno de los problemas de la democracia colombiana, el clientelismo, lejos de ser una amenaza para el régimen político colombiano, era una de las variables que explicaban su estabilidad. Esto por cuanto este tipo de transacción política, al edificarse sobre las desigualdades socioeconómicas y políticas y en la mercantilización de los procesos electorales, limita la autonomía de los sujetos subalternos y, por tanto, los avances del proyecto democrático o la democracia como régimen (Castoriadis, 2001), contribuyendo así a la reproducción del dominio de las élites y la desigualdad política. En este momento, puede argumentarse que, además del clientelismo, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, la exclusión y la desigualdad, factores que Camacho (1998) y Garay (2006), habían considerado asociados de la debilidad de la democracia colombiana, están también en la base de la estabilidad del poder de las élites políticas y económicas y en las dificultades para la acción política libre, lúcida y autónoma de los ciudadanos, los partidos y movimientos políticos alternativos.

El colombiano sería entonces, un régimen político en el que el proyecto democrático se ve obstaculizado por los recursos ilegales o al menos poco éticos, de los actores políticos dominantes. En este, el trámite político-institucional y pacífico de los conflictos, debido a la violencia permanente y las distintas formas de exclusión y represión sobre los actores sociales subalternos, se ve seriamente limitado, dejando el recurso de la violencia y la protesta como mecanismos alternativos para tramitar demandas de estos últimos sectores. Es así como el carácter desigual de las relaciones de poder, la captura del Estado por parte de actores políticos que fusionan en la legalidad e ilegalidad, la inclusión clientelistas de un amplio número de ciudadanos cuya estabilidad o posicionamiento económico depende de esta forma de inclusión y el uso de la violencia permanente frente a las distintas formas de resistencia y oposición, el régimen asegura su estabilidad y reproducción.

Para Castoriadis (2001), la democracia es un régimen político en el que la sociedad, colectiva e individualmente tiene la posibilidad de autorregularse y donde

no hay tema o problema que no sea susceptible de interpelación. La democracia es un proyecto de autonomía social y colectiva que tiene, como requisito el establecimiento de condiciones de igualdad, más allá de condiciones formales o legales, para la participación en la construcción de las distintas formas de regulación de las relaciones sociales. El régimen democrático entonces, como proyecto, buscaría dotar a los individuos y a la sociedad en su conjunto, precisamente de esas condiciones de acción libre y autónoma, en la construcción del orden social en su conjunto. Esto supone, en primer lugar, la superación de la violencia y distintas formas de subordinación y exclusión, como principio de acción gubernamental. Las limitaciones de acceso al poder, incluidas las económicas, serían un retroceso o limitación en el desarrollo del proyecto democrático y servirían más bien para la construcción de una oligarquía liberal en la que, cuando se incumplan de hecho las mismas reglas de acceso al poder, como los mínimos democráticos de las doctrinas liberales (las reglas electorales), conducirían al establecimiento de regímenes autoritarios. Los recursos del poder en Colombia, como los que se han enunciado aquí, servirían así para hablar de un régimen autoritario con elecciones, más que de un régimen democrático. No obstante, esto no significa que el proyecto democrático no tenga cabida, solo que tiene que enfrentar, precisamente, las restricciones que el autoritarismo, en sus distintas manifestaciones, imponen al mismo. La democracia, como régimen, se convierte así en base de un proyecto contrahegemónico en el que los actores sociales subalternos deberán encontrar formas de articulación que, por ahora no son tan claras.

### **Democracia deficitaria, régimen político estable. Una aproximación histórica**

¿Cómo entender la constitución de estos factores en las variables dependientes de la estabilidad política colombiana y, cuáles son las posibilidades de su superación? En primer lugar, estos han sido recursos permanentes de la mayor parte de las élites políticas, nuevas y viejas, para luchar por acceso al poder del Estado y/o para mantenerlo. Con estos, el poder político ha roto permanentemente todos los límites de la legalidad (característica central de los regímenes autoritarios) y, en su articulación, han dejado la mayor parte de sus víctimas entre los actores sociales subalternos: población civil, líderes y lideresas sociales y políticos de distinta orientación y constitución. De este modo, los análisis basados en conceptos como “calidad de la democracia” o las perspectivas centradas en el estudio de los procedimientos democráticos, pueden describir las características de una democracia de baja calidad (Murillo y Osorio, 2007), pero su comprensión se complejiza más si analizamos las raíces de esta baja calidad y lo que la reproduce y da estabilidad.

En segundo lugar, una vez definido el régimen político colombiano como un tipo de autoritarismo con elecciones periódicas fraudulentas, es necesario ampliar la argumentación de esta definición para ver también las posibilidades de transitar hacia un régimen democrático. En tal sentido, hay que tener en cuenta que, desde

finales de los años 80, se habló del régimen político colombiano como uno en el que había alternancia en el poder, pero sin alternativas (Gilhodes, 1993). Con esto se describía un escenario en el que, pese a la regularidad de los procesos electorales, las posibilidades de que fuerzas alternativas a los partidos políticos tradicionales llegaran al poder, era bastante limitada.<sup>6</sup> Este régimen político, para otros autores, se había configurado como el “sistema político del clientelismo” (Leal y Dávila, 1990), pues este tipo de prácticas se había convertido en la cara más visible de las formas de hacer política en Colombia, particularmente a partir del establecimiento del Frente Nacional. Un pacto entre élites liberales y conservadoras que había conducido a que las identidades partidistas comenzaran a resquebrajarse y a ser sustituidas por vínculos mucho más volátiles e inestables, en un mercado electoral cada vez más descentralizado y desconcentrado. Este tipo de sistema político clientelar permitió varios procesos en los que se van a articular, precisamente, los factores de los que hemos hablado. Dado el carácter cada vez más descentralizado y desconcentrado del clientelismo colombiano, hay un creciente debilitamiento del poder ejecutivo nacional y de líderes políticos que tenían alcance nacional. En este marco, todo aquel que ha querido ser presidente en Colombia, particularmente desde los años 80 y, con más intensidad a partir de la Constitución de 1991, ha tenido que negociar el respaldo de unos poderes regionales y locales cada vez más autónomos, heterogéneos y volátiles. Los procesos de descentralización administrativa y un poder autónomo creciente para los congresistas (la mayoría con anclajes electorales muy localizados en departamentos y municipios específicos), gracias a distintas reformas políticas implicaron para las élites centrales, una creciente necesidad de recursos y estrategias cada vez más sofisticada y violentas.

De manera más puntual, la elección popular de alcaldes a partir de 1988 y luego la elección popular de gobernadores, en medio de un proceso de apertura del sistema político fortalecido por la Constitución de 1991, favorecieron la entrada de actores políticos excluidos tradicionalmente de la política nacional, regional y local: movimientos indígenas, afro, campesinos, cívicos entre otros.<sup>7</sup> Pero también

- 
6. Algunos autores han reconocido el peso de la violencia contra la oposición política como limitante para su constitución como verdadera alternativa al poder de las oligarquías tradicionales o nuevas. No obstante, se ha acusado a la izquierda, particularmente armada y a aquellos que han coheestado con esta, de la fragilidad de la izquierda en su conjunto. Con diferencias en enfoques y énfasis, este es el caso de Pizarro (1990) y Bergquist, (2017). Para el primero, la izquierda armada habría sido un obstáculo para la constitución de un proyecto político nacional popular, para el segundo, la fortaleza y longevidad de la izquierda armada, era la contracara de una izquierda civil débil e incapaz de producir un proyecto alternativo frente a las élites tradicionales. Particularmente el Partido Comunista, es acusado de ser incapaz de construir un proyecto viable, capaz de desafiar el poder del liberalismo y el conservatismo, tanto en el plano social, como político.
  7. Para un análisis de las caras positivas y negativas de la apertura del sistema político colombiano a nuevos movimientos políticos, movimientos cívicos y nuevos liderazgos de organizaciones sociales que dieron el tránsito hacia la participación política electoral ver: García (2002); Cruz (2016) y Romero (2004). La violencia a finales de los años 80 comienza a perder toda dimensión. Para las elecciones de 1990, hay que recordar, fueron asesinados 4 candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal. El primero de estos candidatos, que

abrieron la posibilidad para la entrada progresiva y masiva de actores vinculados con actividades ilegales como el narcotráfico,<sup>8</sup> el paramilitarismo y, en menor medida con la insurgencia armada. A partir de este momento, las disputas por el poder del Estado en el ámbito regional son desarrolladas con un uso intensivo de la violencia. La disposición creciente de recursos del narcotráfico será el combustible que usa buena parte de los políticos colombianos, para ganar poder, intensificando la violencia (Gutiérrez, 2015). De ahí que los años 90 se hayan caracterizado por los altos índices de asesinatos, masacres y desplazamiento forzado de millones de colombianos (Echandía, 2001;<sup>9</sup> Romero, 2004), y por la cada vez más evidente penetración del narcotráfico en la política colombiana en todos los niveles territoriales y en las distintas ramas del poder público (Garay y Salcedo, 2018).<sup>10</sup>

Pese a la creciente fragmentación del sistema político, este continuó siendo mayoritariamente bipartidista y fueron estos dos partidos los que inicialmente sirvieron de canal para la incursión directa o indirecta de dineros del narcotráfico en las luchas por el poder del Estado. Pero, la creciente fragmentación del sistema político y de partidos, llevó a que los narcotraficantes y paramilitares construyeran paulatinamente proyectos autónomos y se articularan a la estructura clientelar descentralizada y desconcentrada de este sistema (Blanco, 2013).

De este modo, con una volatilidad creciente de los procesos políticos, un uso masivo de recursos del narcotráfico y distintas formas de violencia, cada vez más degradadas, es que varios analistas hablaron de los años 80 y 90, como décadas de crisis en el sistema político (Leal y Zamosc, 1990; Leal, 1995; Medina, 1997; Murillo y Osorio, 2007). A la crisis del sistema político, se sumará la generada por las políticas neoliberales, con sus privatizaciones, la flexibilización laboral y apertura de mercados. Con esto se afectó la estabilidad laboral de millones de trabajadores cuyos derechos se convierten en foco de la presión de los gobiernos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), en articulación con las élites económicas.

---

contaba con la anuencia y respaldo de las élites liberales y gozaba de reconocimiento público, se perfilaba como el virtual ganador. Los demás, aunque precisamente el poder clientelar volcado al candidato liberal, podían sentar las bases para una articulación de izquierda en el futuro. El paramilitarismo, el narcotráfico y su articulación con fuerzas políticas tradicionales "legales", es culpado de estos asesinatos.

8. Esto no desconoce el hecho de que ya desde finales de los años 70, en medio de la denominada Bonanza Marimbera y luego, con la actividad política de los narcotraficantes más poderosos de la época como Pablo Escobar o Carlos Lehder. El primero que llegó al Congreso de la República en 1982, gracias a una alianza entre el Movimiento de Renovación Liberal, liderado por Ortega, y el movimiento Alternativa Popular, que dirigía Alberto Santofimio Botero (El Tiempo, 23/07/2019).
9. Camilo Echandía muestra que, solo entre 1997 y el año 2000, se cometieron 1096 masacres en 355 municipios de Colombia. Así mismo, en 570 municipios se dieron asesinatos selectivos. Por su parte, en el mismo periodo, la guerrilla realizó 191 masacres en 121 municipios y asesinó selectivamente a civiles en 315 municipios (Echandía, 2001: 233).
10. Esta paradoja poco alentadora, es la que sirvió para que Mauricio Romero (2004), exponga la idea de un proceso de democratización política y una contrarreforma paramilitar en la Colombia en los años 80 y 90.

De este modo, las políticas neoliberales contribuyeron no solo a debilitar progresivamente a los movimientos sindicales (Delgado, 2002; Zúñiga, 2012), también aumentaron la fragmentación social y política. En estos procesos, el narcotráfico ya articulado en las esferas políticas y económicas contribuyó a un incremento muy importante de la concentración de la propiedad agraria, por la vía de desplazamientos masivos y compras obligadas de tierra de millones de campesinos (Machado, 2000; Hristov, 2014).

A finales de los años 90, este escenario complejo, en el que se combinan clientelismo, narcotráfico, paramilitarismo, neoliberalismo, una insurgencia armada con un incremento significativo de su capacidad militar (también “beneficiaria” de los réditos del narcotráfico), y un aumento de la violencia social, se agrava aún más con un choque económico externo en el cual la economía colombiana se vio duramente golpeada. El gobierno de Andrés Pastrana, marcó en este proceso, un punto de inflexión, en la medida en que se profundizó el conflicto interno armado como nunca antes, en medio de unos diálogos de paz en el que los actores (El gobierno y las FARC), lejos de prepararse para un acuerdo que pusiera fin a un conflicto interno armado de 50 años, fortalecieron sus capacidades de operación bélica y, de parte del gobierno y las élites políticas, la arremetida ideológica (Cruz, 2009; Hristov, 2014). Pese a esto, los años noventa también fueron escenario de luchas sociales, en temas como las privatizaciones, las reformas laborales, la afectación del agro por las políticas neoliberales y, por supuesto, la paz (Archila, 2002). Una paz que no llegó en este momento, sino que, debido al fracaso de los diálogos (de sordos), entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, abrió el espacio para que lo que venía desarrollándose tras las cortinas de un proceso destinado al fracaso, se posicionara ante la opinión pública y buena parte de la clase política dominante: el proyecto guerrillero de Álvaro Uribe Vélez.

Este líder político, terminó por convertirse, en medio de la crisis económica, política y social del país, en el eje articulador de las distintas fuerzas de derecha y conservadoras del país. Su promulgación como candidato, que se realizó a través del movimiento político “independiente” Primero Colombia, terminó siendo apoyado por la mayor parte de políticos tradicionales y pertenecientes a las nuevas élites políticas y sus redes clientelares, legales e ilegales, muchas de las cuales habían apoyado antes a Andrés Pastrana. Con esto, personalismo, clientelismo y poder económico, generan una fuerza imparable. Se suele considerar al respecto, que el carisma y liderazgo de Uribe fue suficiente para llegar al poder (Rincón, 2002). No obstante, esta mirada desconoce la manera en que a éste se articularon los poderes regionales y locales de la mayor parte de partidos y movimientos políticos de la derecha colombiana, con lo que su poder estuvo supeditado así a la transacción clientelar, propia del “sistema político del clientelismo” (Blanco 2013). De este modo, Uribe no fue la excepción en un sistema político altamente fragmentado, en recurrir al clientelismo y la “concertación” (Parra y Guevara, 2017). De hecho, su campaña resulta tan arrasadora (lo que le permite ganar en primera vuelta), gracias a que las distintas facciones del liberalismo y el conservatismo ven en su per-

sonalidad, una salida “alternativa” al creciente poder que manifestaban las FARC y la insurgencia en general. De ahí que no haya sido casual que el periódico *El Tiempo*, en una de sus editoriales, se pronunciara en favor de la candidatura de Uribe, explicitando que con esto dejaba de lado su histórico oficialismo liberal. Para este diario, el contexto ameritaba una política de seguridad, como la que ofrecía Uribe (Blanco 2008; *El Tiempo*, 13/03/2002).<sup>11</sup>

Este gobierno representará en su desarrollo, la articulación de fuerzas políticas legales e ilegales en la lucha contra la insurgencia, a la que oficialmente deja de denominarse de este modo, para ser convertida en una “amenaza terrorista”. Para esto contará con un Estado fortalecido en su capacidad militar, heredado del Plan Colombia de Andrés Pastrana, y multiplicado por el mismo Uribe a través de sus propias gestiones (Archila, 2012; Lindsay-Poland, 2018). En este último aspecto, Uribe Vélez contará con un contexto internacional favorable, gracias al inicio del boom de los *comodities*, que le garantizan altos ingresos económicos, el incremento de inversión extranjera y una profundización de los procesos de privatización.<sup>12</sup> Así mismo, se verá beneficiada de un contexto internacional en el que, a partir del atentando contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos, las potencias se articu-

11. Un detalle muy importante en este momento es que este periódico estaba en manos de la familia Santos y, particularmente tenían en este una influencia determinante Juan Manuel Santos y Francisco Santos. Estos políticos, como se sabe, terminan formando parte del gobierno de Uribe, Francisco como Vicepresidente en los dos mandatos y, Juan Manuel Santos, como Ministro de Defensa en el segundo gobierno. En este gobierno, su actuación fue determinante en la lucha contra las FARC, pues fue bajo su dirección que se dio de baja algunos de los líderes más importantes de este grupo insurgente: Raúl Reyes, Alfonso Cano, el “Negro Acacio”, “Martín Caballero”, entre otros. Hay muchos motivos para suponer que la familia Santos, fue pieza clave para que Uribe lograra el apoyo de una parte importante de la oligarquía tradicional tanto del Partido Liberal, como del Partido Conservador. En buena medida, se impulsó la idea de que, dadas las circunstancias de incremento del poder de la insurgencia, era necesaria la mano dura y sin contemplaciones (Ver: *El Tiempo*: “Tenemos Comandante” (18/08/2001); “País en construcción: ¿Si futuro?” (23/11/2001); “El referendo y la lupa externa” (5/10/2003). En el camino, como se sabe, los excesos de la fuerza y las acciones paramilitares en contra de civiles se intensificaron, así como la persecución de miembros de la oposición política, tanto en el parlamento, como en el campo de los movimientos y organizaciones sociales. Estos fueron acusados de ser cómplices del terrorismo, cuando no, de ser “guerrilleros de civil” (Romero, 2003: 21; Velásquez, 2007: 139). Este discurso que vincula a miembros de distintas organizaciones y movimientos sociales con la insurgencia era el discurso recurrente del paramilitarismo. Con el gobierno de Uribe, se vuelve también el discurso oficial.

12. Durante los dos gobiernos de Uribe, se llevaron a cabo importantes reformas económicas en las que se potenció la inversión extranjera, que habría crecido en un 50% entre el 2002 y el 2010; una inversión concentrada sobre todo en producción minera y petróleo (Salazar, 2010). Ahora bien, así como aumentó la inversión, también aumentó la inestabilidad laboral, se intensificaron las privatizaciones y se favoreció al gran capital. Los grandes empresarios, por supuesto terminaron muy agradecidos, pues sus utilidades se incrementaron exponencialmente. Las utilidades del sistema financiero crecieron 7 veces, al pasar de “\$632.000 millones en el 2002 a \$4.4 billones en el 2009. En la misma dirección, entre el 2002 y el 2007, la participación de las utilidades de las empresas en el PIB pasó del 28,9 al 33,7 por ciento, un incremento de casi 5 puntos porcentuales que, por supuesto, se dio a costa de una disminución idéntica de la participación de los asalariados y los de cuenta propia. Esto habría representado unos US\$14.000 millones anuales, que ya no llegan a los bolsillos de los trabajadores, sino que son más utilidades para las empresas (Cabrera, 2010).



lan para enfrentar al “enemigo común”: el terrorismo. Esto representará la continuidad del Plan Colombia gestionado por el gobierno de Pastrana y su reorientación como guerra contra el terrorismo (Lindsay-Poland, 2018).

Bajo la nueva lógica de lucha contra el terrorismo, la criminalización y persecución de líderes y activistas de heterogéneos y múltiples movimientos sociales, se recrudeció. Las fuerzas militares en este periodo fueron responsables de masacres de miles de ciudadanos de sectores populares que fueron asesinados y luego disfrazados de combatientes. Los aberrantes hechos fueron conocidos después como *fal-sos positivos*. En distintas regiones del país miembros del ejército “reclutaron” a jóvenes a quienes se les prometía trabajo fuera de su lugar de residencia y luego eran llevados a distintas regiones donde eran fusilados y disfrazados de insurgentes. En este gobierno, además, muchos de quienes fueron altos funcionarios y buena parte de los congresistas que apoyaron su reelección, luego se comprobó pertenecían a las fuerzas políticas del paramilitarismo o estaban vinculados con redes nacionales e internacionales de narcotraficantes. En el proceso de desmovilización de grupos paramilitares alentado por este gobierno, se afirmó que el 35% del Congreso estaba en manos de estos.<sup>13</sup> En este marco, la misma democracia electoral, estuvo seriamente cuestionada, pues el gobierno afectó negativamente su calidad, en cuatro aspectos centrales: Estado de Derecho, la libertad de prensa, la transparencia gubernamental y la competitividad política (Niño, *et al.*, 2018).

En el campo del sistema político, dos procesos generales continuaron su desarrollo en los dos periodos de Uribe en el poder y luego en los de Juan Manuel Santos. En primer lugar, se acentuó el declive del bipartidismo. Este declive, que era ya visible durante la década de los noventa, debido a la atomización y el faccionalismo de los partidos tradicionales, dio paso a multipartidismo atenuado o moderado gracias a las reformas políticas de 2003, 2005 y 2009, que logran frenar la fragmentación política y fortalecen los partidos políticos más grandes (Tanaka, 2008: 93; Pachón, 2010: 47-78; Sandoval, 2018). En este marco, no obstante, la particular estructura colombiana de clientelismo sigue teniendo vigencia y sirve de soporte para la estabilidad del gobierno, pero, por encima de este, del sistema político colombiano en general. En este caso, lo mismo puede decirse del uso de la violencia (legal e ilegal), como recursos de control político de las derechas principalmente, de la corrupción, como herramienta para el acceso a/o mantenimiento del poder del Estado en distintos niveles.

Ahora bien, estas mismas herramientas se volverán en contra de Uribe, en el momento en que busca una segunda reelección. Esto, si se tiene en cuenta que

---

13. Ungar y Cardona (2010), analizan la penetración del paramilitarismo entre el 2002 y el 2010, preguntándose si hubo o no una bancada “parapolítica”, estudiando el comportamiento de los 100 parlamentarios investigados por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Buena parte de la evidencia recopilada por los investigadores confirma que efectivamente hubo esta bancada y con ella la intención de institucionalizar o legalizar el poder paramilitar en buena medida, articulados con el poder ejecutivo.

cuando él y sus aliados más cercanos impulsan el referéndum que buscaba la posibilidad de ser elegido por segunda vez, su aprobación se ve frenada por la Corte Constitucional por un “vicio de trámite”, a pesar de ser agenciado por expertos juristas y tener un respaldo popular sin precedentes en la historia política de Colombia al finalizar el periodo presidencial.

En consecuencia de lo anterior, se ratifica la fortaleza de las prácticas clientelistas descentralizadas y desconcentradas, primero dentro de la estructura del bipartidismo (González, 1993: 15-68; Gutiérrez, 2002: 25-78), y luego dentro del multipartidismo que se configura en lo que va del siglo XXI (Gutiérrez, 2007; Molina, 2010). Así, si bien el personalismo ha sido muy importante en el desarrollo de la política colombiana contemporánea, al no contar con las estructuras institucionales de soporte suficientes para consolidarse, no rompe las estructuras partidistas tanto tradicionales como nuevas, sean estas alternativas o disidentes al del bipartidismo tradicional.

De este modo, desde antes de la Constitución de 1991 había cierta discrecionalidad legislativa del Presidente en Colombia, a través de la posibilidad de declarar estados de excepción y legislar “por decreto” (Pachón, 2010: 47-78), el presidente no podía hacerlo de manera indeterminada en el tiempo. Este poder se va a limitar mucho más a partir de la Constitución de 1991 y ni siquiera la gran popularidad de Uribe, después del 2002, lograron romper la relativa autonomía del Legislativo y la particular “independencia de poderes” que caracteriza al sistema político colombiano.<sup>14</sup> Esto se puede confirmar a través de las dificultades que el ex-presidente Uribe tuvo, una vez que sale del poder y es desplazado del control del gobierno por su sucesor, para articular a sus huestes y negar o frenar las iniciativas del gobierno. También tuvo dificultades para hacer aprobar su reelección y, como se hizo evidente años después, esta fue comprada con notarías y otros “premios”, que se dieron a testaferros de los congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus (Sandoval, 2018; Martínez, 2008; Velasco, 2017).

Un segundo proceso que se abre a partir del gobierno de Uribe es el del creciente peso de fuerzas políticas alternativas de izquierda y centro, particularmente en el ámbito local de grandes ciudades, como Bogotá, así como en algunas gobernaciones y en el Congreso de la república. En el caso de Bogotá, luego de algunas

---

14. Hace falta mucha investigación sobre los modos en que han operado los gobiernos de coalición o concertación en Colombia y cómo se desarrollan los procesos electorales en los que se han articulado las principales fuerzas políticas del país con los políticos más opcionados para llegar a la presidencia. Estas investigaciones mostrarán cómo la corrupción y el clientelismo operan como mecanismos de toma y dame entre el poder ejecutivo y el legislativo. Aquellos que “apuestan” al vencedor, reciben a cambio recursos, contratos o dinero en efectivo, una vez el candidato apoyado llega a la presidencia. Una vez lograda la presidencia tiene que negociar las políticas y leyes económicas a cambio de respaldo para las iniciativas legislativas. Las negociaciones, mercantilizadas entre el ejecutivo y el legislativo, filtran las políticas, no en función de criterios técnicos o ideológicos, como suele considerarse, sino en función de lo que pueden o no recibir los congresistas “coaligados” con el presidente para recuperar los dineros invertidos y reproducir su capital político e incrementar el económico. Es a esto a lo que llamamos la particular forma de “independencia de poderes”.



experiencias de alcaldes “alternativos” o independientes, como el profesor Antanas Mockus, en los años 90, la izquierda colombiana logró la alcaldía por tres periodos consecutivos entre el 2004 y el 2015, con Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno Rojas y, finalmente, Gustavo Petro. Si bien es cierto, entre estos líderes políticos hay grandes diferencias, tienen en común el haber llegado a lo que en Colombia se conoce como la “segunda magistratura”, gracias al impulso de movimientos en los que se agruparon, principalmente partidos y movimientos de izquierda. En este mismo marco, se constituyeron posibilidades de articulación política para enfrentar a Álvaro Uribe, en su segundo mandato, bajo el liderazgo del exmagistrado liberal, Carlos Gaviria Díaz y luego para enfrentar a Santos, bajo el liderazgo (menos aún a la izquierda), del exalcalde Antanas Mockus. En estos procesos, no obstante, también se pusieron en evidencia las difíciles barreras que las fuerzas políticas alternativas, de izquierda y centro, tienen que enfrentar para llegar a la primera magistratura: las estructuras clientelares regionales y locales que se articulan más naturalmente con fuerzas de la derecha tradicional o de las nuevas derechas radicales del uribismo;<sup>15</sup> una de las principales barreras, sigue siendo la estructura clientelar de los departamentos y municipios.

No obstante, estas barreras, si comparamos los procesos electorales de 2006 hacia adelante, con los de años anteriores, notamos un importante despegue de candidatos alternativos ahora en el plano nacional. Vemos también como se van delineando las fronteras ideológicas entre las fuerzas conservadoras de derecha y movimientos políticos alternativos de centro o de izquierda, como se puede ver en la siguiente tabla:

Colombia: votación por los candidatos mayoritarios de izquierda y alternativos 1974-2018				
Año	Candidato	Partido / Movimiento	Número de votos	Porcentaje
1974	Hernando Echeverry	Unión Nacional de Oposición UNO	137.054	2,7
1978	Jilio César Pernía	UNO	97.234	1,9
1982	Gerardo Molina	Frente Democrático	82.858	1,2
1986	Jaime Pardo	Unión Patriótica UP	328.752	4,5
1990	Antonio Navarro	Alianza Democrática M19 AD M-19	754.740	12,5
1994	Antonio Navarro	AD M-19	219.241	3,8
1998	---	---	--	--

15. Una mirada general puede mostrarnos estas dificultades. Entre el 2002 y el 2018, en los momentos en que ha habido fuerte competencia, es cuando se han enfrentado estructuras clientelares de la derecha colombiana. Es el caso de la elección de 2014, cuando, tras la ruptura entre Uribe y Santos por la manera en que este último llevó a cabo el proceso de Paz con las FARC, se enfrentó el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga (acusado luego de haber recibido dineros de Odebrecht para su campaña). En esta ocasión, se enfrentaron dos candidatos poco carismáticos, pero los dos contaron con

2002	Luis Eduardo Garzón	Polo Democrático Alternativo PDA	680.245	6,2
2006	Carlos Gaviria	Polo Democrático Alternativo PDA	2'613.157	22,0
2010	Antanas Mockus	Partido Verde	3'587.975	27,5*
2014	Clara López	PDA / UP	1'958.518	15,2
2018	Gustavo Petro	Colombia Humana	8'040.449	41,8*
* Resultados de la segunda vuelta.				

Fuente: Pizarro, 2018: 19.

Se ve así que, salvo la candidatura del candidato del M-19, Antonio Navarro Wolff,<sup>16</sup> en las sangrientas elecciones de 1990 quien obtuvo el 12,5%, los candidatos alternativos no lograron superar nunca barrera del 5% de los votos. A partir de 2006, el incremento es muy importante, al estar entre el 15,2% (Clara López, quien fuera alcaldesa encargada de Bogotá, entre 2011 y 2012), y de los votos y el 41,8%, en las elecciones de 2018, cuando se enfrentan Iván Duque, del Centro Democrático de Uribe y dos candidatos, uno de centro-derecha (el profesor Sergio Fajardo), y uno de centro-izquierda, Gustavo Petro Urrego. En estas elecciones, como se sabe, se impone, el candidato uribista, pero por un porcentaje significativamente menor a aquel por el que eran vencidos antes los candidatos de izquierda o alternativos.

De este modo vemos como estos dos procesos evidencian un lento pero progresivo deterioro de las estructuras clientelares como soporte de la estabilidad del régimen político colombiano y abren nuevamente la posibilidad de fortalecer el proyecto democrático. El gobierno de Juan Manuel Santos, que en principio es “sucesor” de Uribe, impulsa y lleva hasta el final, en contra de su “mentor” y con las vi-

---

fuerte respaldo de estructuras clientelares. El uribismo, en este caso, logró vencer en primera vuelta a Santos, pero luego éste movió la maquinaria electoral de los departamentos de la Costa Atlántica, a lo que le sumó alianzas con la izquierda y sectores independientes sobre el tema de la paz, lo que le dio la ventaja suficiente para vencer a Zuluaga, por estrecho margen en el ballottage. Por el contrario, en los momentos en que candidatos alternativos han logrado posicionarse significativamente, las distancias en el número de votos resultan más o menos abismales (al menos, hasta 2018). Es el caso de las elecciones de 2006 cuando Uribe, en auge de su popularidad, vence a todos sus opositores por una cantidad de votos muy significativa. En este momento, el candidato Carlos Gaviria logró articular a una buena cantidad de partidos y movimientos de izquierda, pero esto no alcanzó para desafiar el poderío electoral de Uribe que, en este momento incrementó su popularidad luego de su primer gobierno y sumó una importante fuerza clientelar. Un tercer caso es en las elecciones de 2010, cuando se lanza por primera vez Juan Manuel Santos, con el respaldo de Uribe. En este caso, dado el poco carisma de Juan Manuel Santos y pese a contar con el apoyo del uribismo y otras estructuras políticas tradicionales-clientelares, en el balotaje casi triplica la votación de su rival, el profesor Antanas Mockus. Esto muestra como el no contar con estructuras clientelares fuertes limita sobremedida las posibilidades de disputar la presidencia en Colombia. Para los resultados electorales ver: Agudelo y Sarria, 2019: 113-114.

16. Navarro Wolff fue miembro del M-19 y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En las elecciones de 1990, fue el reemplazo de esta fuerza política, tras el asesinato de quien se perfilaba como uno de los principales contendores: Carlos Pizarro Leongómez.

cisitudes más o menos conocidas, el Acuerdo de Paz con las FARC. Durante los gobiernos de Santos, se contribuye a este proceso de delimitación de fronteras entre fuerzas políticas conservadoras y fuerzas alternativas. El gobierno de coalición que se constituyó implicó sustentar tanto sus candidaturas, como sus dos gobiernos, en las estructuras clientelares regionales, muchas de las cuales han estado vinculadas con redes de corrupción y narcotráfico. Así como su antecesor que tuvo el respaldo de políticos regionales vinculados con el narcotráfico, el paramilitarismo y redes de corrupción (Albarán y Garay, 2018), el gobierno de Juan Manuel Santos está marcado por crecientes escándalos de corrupción en la contratación de obras de infraestructura y por sustentarse en el clientelismo tradicional.<sup>17</sup> Con este gobierno, además, se continúa con las políticas neoliberales, aunque se vea obligado a desarrollar políticas sociales que disminuyen levemente la pobreza y la desigualdad.<sup>18</sup>

Además de lo ya señalado, en este gobierno se incrementa la violencia contra líderes sociales,<sup>19</sup> se hacen más visibles los casos de corrupción y vínculos de políticos tanto afines a Uribe como a Santos, con paramilitares y narcotraficantes y se llevan a cabo importantes movilizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y de docentes en contra de las políticas económicas, la pretensión del gobierno de profundizar la privatización de la educación superior y contra la violación sistemática de derechos sociales de los pueblos indígenas. Estos temas van a marcar la agenda política de movimientos y partidos políticos alternativos, al punto de impulsar un plebiscito contra la corrupción que convocó a más de 10 millones de votantes, pero que, no alcanzó el mínimo de votos para ser aprobado. En este marco, los gobiernos de Santos van a ser testigos de un incremento de las movilizaciones sociales, particularmente de campesinos, estudiantes y sindicalistas. Así, para Cruz (2016), hay un ciclo ascendente de protestas desde el año 2010 y el marco de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, que contribuirá a fortalecer estos procesos de ampliación de las demandas sociales.

Finalizado el último gobierno de Santos, el país se polariza y la confianza en la democracia decae. Hernández y Echeverri (2018), exponen este decrecimiento de

---

17. Su vicepresidente, quien se perfilaba como el principal candidato para las elecciones de 2018, Germán Vargas Lleras, fue designado por Santos como una especie de "Súper Ministro", encargado del desarrollo de la infraestructura vial y de vivienda de interés prioritario, por todo el país. Este utilizó el presupuesto como una gran chequera (cerca de 15 mil millones de dólares), para acceitar las maquinarias electorales. No obstante, fue el gran derrotado en las elecciones de 2018, al no lograr ni 2 millones de votos. Las maquinarias decidieron respaldar a Iván Duque desde la primera vuelta.

18. Durante este gobierno, gracias también a la continuidad del boom de exportaciones y a algunas políticas sociales asistenciales, disminuye levemente la desigualdad, pasando de un índice de Gini de 0.557 a 0.508. Los indicadores de pobreza monetaria y pobreza multidimensional también mostraron avances importantes, aunque vulnerables al entorno externo, dados los altos niveles de informalidad de la economía (Monterrosa, 2018).

19. De acuerdo al Programa Somos Defensores, alrededor de 800 líderes y lideresas sociales fueron asesinados durante el gobierno de Santos, de los cuales, entre 400 y 600, perecieron, después de la firma del Acuerdo con las FARC (Aguirre, 2020). Para un análisis de la sistematicidad del asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales, que tiene en cuenta la estructura de los poderes locales y regionales ver: Nocua, 2019.

la satisfacción de los colombianos sobre el funcionamiento de su democracia. Así: “Uno de los valores más preocupantes es el nivel de satisfacción de los colombianos, para 2015 solo el 47% se encontraba satisfecha o muy satisfecha con la forma en que funciona la democracia en Colombia (García, *et al.*, 2015). Y para 2017, el 11,5% se mostró muy satisfecho, el 34,5% no se encuentra ni satisfecho ni insatisfecho, y el 50% dice estar muy insatisfecho con la democracia en Colombia (DANE, 2017: 502).

En este marco, el candidato uribista (un desconocido<sup>20</sup> que había llegado al congreso de la república gracias a la ubicación que le concedió Uribe Vélez, en las elecciones de 2014, en las que el Centro Democrático participó con listas cerradas, sin voto preferente), logró articular a varios de los partidos políticos que antes habían participado de la coalición de Santos. Conservadores, liberales, líderes de Cambio Radical, miembros del partido de Juan Manuel Santos (Partido de la Unidad Nacional), entre otros, terminaron apoyando la candidatura de Iván Duque, quien prometió dar vuelta a los acuerdos que el gobierno Santos había firmado con las FARC<sup>21</sup> y recuperar la economía que venía en caída en los últimos años.

En estos procesos, dos candidatos “alternativos” se disputaron las votaciones en medio de una creciente polarización. El ganador, quien tuvo que ir a segunda vuelta, recibió un país con unas dinámicas de movilización social en ascenso y con una economía golpeada por choques externos y con capacidades estatales limitadas para enfrentar estos choques, debido a la reprimarización y vulnerabilidad heredada de más de 30 años de políticas neoliberales. Para llegar al poder, además de las alianzas expuestas, Iván Duque prometió más de estas mismas políticas, bajo el discurso de “recuperar la confianza empresarial e inversionista” y promover la productividad del país. Prometió del mismo modo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y principalmente sus salarios, sin imponer más impuestos y de

---

20. Una referencia un tanto apologética, pero indicativa de la trayectoria política del actual presidente de Colombia, puede encontrarse en: *DW*. “Iván Duque, de aprendiz de mago a presidente de Colombia”. Recuperado de: <https://bit.ly/2AdMOUf>.

21. Hay un elemento muy importante en el desarrollo del proceso de paz adelantado por Santos. Este, como se sabe, fue sometido a un plebiscito el 2 de octubre de 2016 en el que, con una baja participación de apenas el 37.4% del censo electoral fue negado. El triunfo del No (logrado con una campaña llena de mentiras sobre el proceso), contó con el agenciamiento de Uribe, el respaldo de iglesias cristianas, parte de la prensa y las estructuras clientelares del uribismo en las regiones. Este triunfo, no obstante se dio por un margen de apenas el 0.42%, al obtener una votación de 6'431.372 votos (50.21%) frente al Sí, que obtuvo 6'377.464 (49.79%). Esto obligó al gobierno a tramitar la aprobación de los acuerdos por la vía parlamentaria, donde tenía mayoría gracias a la coalición que había constituido en las elecciones de 2014. Este triunfo, que fue magnificado e instrumentalizado en las elecciones de 2018 por el uribismo y sus aliados, muestra una polarización interesante que se va a manifestar también en los procesos electorales de 2018 y en las movilizaciones de 2019. Esto por cuanto la defensa de los acuerdos fue un tema central de campaña, particularmente del candidato Gustavo Petro y de buena parte de las movilizaciones que se desarrollaron a lo largo de 2019 y, con mayor intensidad, las del 21N y siguientes. Esta polarización contribuye en los procesos de movilización social, también a debilitar la capacidad de las estructuras clientelares y a activar a millones de ciudadanos, antes inactivos en los procesos electorales, como en el campo de las luchas sociales.

hecho, disminuyendo los existentes. Nada de eso ha cumplido y, por el contrario, ha promovido reformas tributarias y fiscales al estilo de Uribe en sus dos gobiernos. Políticas que, como vimos, incrementan la desigualdad y vulnerabilidad de los sectores sociales subalternos. Del mismo modo, en lo que va de este gobierno, se ha incrementado el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En lo que va de su gobierno, han sido asesinados más de 200 líderes sociales y 170 excombatientes de las FARC.<sup>22</sup> Para completar, el incremento del desempleo ha marcado el escenario económico, así como la sensación de malestar por las promesas incumplidas del gobierno y su torpeza y la de muchos de sus funcionarios para manejar las relaciones internacionales y los conflictos nacionales. Esto ha hecho que la popularidad del mismo sea de las más bajas de los presidentes de los últimos treinta años (Cano, 2020).

### **El “Paro Nacional del “21N”.** **Trayectoria y perspectivas de la democracia colombiana**

Si comparamos los procesos de movilización social que se han producido en Colombia en los últimos tiempos, lo sucedido a partir del 21 de noviembre de 2019 parece no tener precedentes. Podría decirse que, tal vez un equivalente histórico de movilización en Colombia sería el “Paro Cívico de 1977”, cuando una multiplicidad de actores sociales, se tomaron las calles de las más importantes ciudades y fueron duramente reprimidos por el gobierno de Alfonso López Michelsen (Medina, 1997; Romero, 2002; Múnera, 1998; Archila, 2008; Molano, 2010; García, 2017). En 2019, como en 1977, si bien hay algunas coincidencias en términos de procesos de incremento de demandas, protestas sociales y convocatorias obreras y represión gubernamental nadie parecía prever las inmensas y sostenidas movilizaciones.

Cuando el 21 de noviembre llegó, se había generado mucha ansiedad e incertidumbre por lo que sería la movilización.<sup>23</sup> Desde sectores de izquierda y distintos movimientos sociales se habían generado grandes expectativas por esta movilización convocada inicialmente por los principales sindicatos del país.<sup>24</sup> A la convo-

22. Para un análisis detallado de la trayectoria de la persecución de los líderes sociales a partir del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno Santos (Aguirre, 2020; Cano, 2020).

23. La empresa Data Freaks (“curiosamente” contratista del Ministerio de Defensa Nacional), analizó, días previos al Paro del 21N, las interacciones en redes sociales sobre el Paro convocado. Allí encontraron 335.000 interacciones, de las cuales el 65% manifestaba respaldo del Paro Nacional. Así mismo, hallaron que una buena cantidad de personas, aunque estaba de acuerdo con los motivos del paro, no participarían por miedo. Por otro lado, la campaña de oposición a la movilización, bajo el lema “yo no paro, yo produzco”, no encontró eco en las redes sociales. De igual manera, la vinculación de los convocantes con el castrochavismo y con el “Foro de São Paulo” más que respaldo generó rechazo y contribuyó a motivar más a los indecisos. El torpe manejo del paro por parte del gobierno y la deslegitimación del mismo, finalmente, hacía pensar de acuerdo al seguimiento de redes, que el paro iría más allá del 21 de noviembre, como finalmente sucedió (Cembrano, 2019).

24. Desde el mes de octubre venía preparándose la movilización y se había hecho el llamado al paro. El 4 de octubre, se reunieron las principales organizaciones sindicales del Comando Nacional Unita-

catoria, no obstante se habían sumado la Iglesia católica, líderes de opinión y hasta la reina de belleza recientemente elegida.<sup>25</sup> Una buena parte de la “opinión pública”, respaldó el paro y contribuyó a través de columnas de opinión en los principales diarios del país y, de redes sociales a promover la asistencia.

En la mañana de ese día, poco a poco fueron sumándose miles y miles de personas que pronto llenaron las principales avenidas y plazas de las más importantes ciudades del país. Pero no solo fue en estas ciudades donde se produjeron movilizaciones. En las ciudades medianas y pequeñas, e incluso en pueblos apartados, se movilizaron docentes y otros actores sociales, como ambientalistas defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, afrodescendientes, movimientos feministas, entre otros. La expectativa se cumplió con creces. Millones de personas no pertenecientes a movimiento u organización social alguna, se movilizaron. Familias enteras coparon las calles y plazas, reclamando al gobierno por sus políticas económicas, las intenciones de realizar reformas laborales y pensionales, para favorecer a los grandes empresarios, el incremento del desempleo y particularmente el juvenil; la creciente informalidad laboral; el incumplimiento de acuerdos pactados en el 2018 con sectores sindicales del sector público y con organizaciones estudiantiles de todo el país; las agresiones a los líderes y lideresas, las amenazas, los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno Santos y las FARC; los desmandes y brutalidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en la represión a marchas pacíficas, la masacre de niños en un campamento de disidencias de las FARC y la criminalización de la protesta y la corrupción, entre otros temas.<sup>26</sup>

Por su parte, el gobierno de Duque y algunos de sus funcionarios más importantes, como la ministra del Interior y la vicepresidenta habían acusado a quienes convocaban al paro de mentirle a la ciudadanía denunciando unas reformas (tributaria, laborales, pensionales) que, a decir de estos funcionarios, el gobierno no estaba tramitando. Acusaron a los convocantes promover la mentira y la polarización del país. Denunciaron la intervención del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno ruso, como financiadores y auspiciadores de las movilizaciones. Anunciaron desmanes y actos vandálicos. Nada de eso detuvo la gran marcha. Probablemente, de

---

rio: (CUT, CGT, CTC, CPC) y con la participación del COS, la Cumbre Agraria, Aconalferros, CRIC, UNEES, CREES y más de 100 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales (AIL, 2019a). Hay que tener en cuenta que, como hemos mencionado, la movilización social en Colombia ha venido desde el año 2010 en un proceso de ascenso. El 17 de marzo de 2016, ya se había realizado una gran movilización convocada por las grandes agremiaciones sindicales y había tenido un eco importante. De hecho, fue considerada la más grande movilización en los últimos 15 años por la masiva participación no solo en las grandes ciudades, sino en más de 100 municipios (Comando Nacional Unitario, 2016). El gobierno de Santos, además, fue testigo de importantes movilizaciones sociales en contra de las políticas agrarias, comerciales, educativas y tributarias (Cruz, 2016). Estas movilizaciones venían contribuyendo a articular a los distintos movimientos sociales para la realización de actividades conjuntas.

25. Sobre algunos de los que se sumaron a la convocatoria y la manera en que parte de la prensa habló del “temido 21N” (Montes, 2019).

26. Sobre los puntos del pliego de peticiones al gobierno ver: (AIL, 2019b; BBC, 2019a).

hecho, haya motivado a los distintos grupos y movimientos sociales a incrementar su activismo y a movilizar a más y más personas que reconocieron el cinismo del gobierno, como mostramos antes.

Una vez terminadas las marchas en distintos lugares de Colombia, a través de redes sociales se convocó un inédito cacerolazo, que duró hasta pasada la media noche. Algunos brotes de violencia se presentaron en distintos lugares de las más grandes ciudades, particularmente en Cali y Bogotá. En esta primera ciudad se decretó un toque de queda. El 22 de noviembre, lo mismo se hizo en Bogotá, argumentando amenaza de saqueos a urbanizaciones y sectores residenciales. En las dos ciudades se hicieron correr rumores de asaltos masivos que no se presentaron. Con terror, se combatieron las manifestaciones pacíficas que se desarrollaron a lo largo y ancho de Colombia.<sup>27</sup>

Pero el terror no detuvo las movilizaciones. El 23 de noviembre fue asesinado Dilan Cruz, en el centro de Bogotá, por un disparo propinado por un miembro del ESMAD. Dilan era joven de 19 años que apenas terminaba su bachillerado y se había sumado a las protestas que desde temprano se realizaban. El asesinato conmovió y despertó la solidaridad a miles de ciudadanos, que ese mismo día hicieron del lugar donde cayó un altar. El domingo 24 y el lunes 25, las manifestaciones continuaron. Lo mismo sucedió los días siguientes, hasta el 8 de diciembre. Con una gran diversidad de actividades, que incluyeron bailes masivos, plantones artísticos callejeros, conciertos con la participación de artistas alternativos del rock y el pop nacional, músicos tradicionales y bandas sinfónicas y filarmónicas; grupos de danza y teatro se tomaron las calles en un evento sin precedentes en la historia de Colombia.<sup>28</sup>

---

27. Sobre lo sucedido en las dos ciudades y los modos en que se promovió el terror de la población a través de los toques de queda ver: *Colombia Informa*, 21/11/2019; Rueda, 2019a; 2019b; *BBC*, 2019b; *Noticias Caracol*, 2019; García, 2019.

28. Sobre lo sucedido a partir del 21 de noviembre y su lugar en la historia de las movilizaciones se han realizado algunos documentos analíticos y descriptivos. En estos se compara el 21N con el Paro Cívico Nacional de 1977. Algunos han llegado a afirmar que es la movilización más grande y significativa de los últimos 70 años, incluso por encima del paro del 77 (Ahumada, 2020). Por su parte, Tovar analiza el 21N, considerando que Colombia ha estado históricamente marcada por la escisión entre lo que llama, usando categorías habermasianas, Facticidad y Validez; esto es, una ruptura entre lo proclamado constitucional y legalmente y las prácticas de ejercicio del poder. Desde esta interpretación, que se remonta hasta el siglo XIX, el autor considera que el paro apunta a la ruptura de esa escisión y abre la posibilidad para construir una nueva hegemonía, que, espera el autor, sea de carácter popular. Un tercer documento realizado por Linares (2020), analiza las similitudes y diferencias entre el 21N y el paro del 77, afirmando que, una de las características del 21N, es haberse dado en el contexto del postacuerdo; hecho que, para la autora, permite hacer visibles demandas y actores que antes eran invisibilizados y que hoy apuntan a la construcción de un país que pueda vivir en paz y con verdadera justicia social. Para esto, hace un análisis de las causas inmediatas, relacionadas, fundamentalmente, con las políticas económicas y sociales del gobierno de Duque, así como de las formas y repertorios de las manifestaciones, destacando su creatividad y capacidad de convocatoria. Concluye la autora con una lectura optimista frente al potencial transformador de las movilizaciones y, ante la eventual negativa del gobierno a sus propuestas, prevé un incremento de la resistencia y rebeldía. Finalmente, Gómez (2020), destaca también la creatividad de los repertorios de protesta, así como la solidaridad



No obstante, este activismo ciudadano y la gran creatividad y despliegue de iniciativas ciudadanas para manifestar el descontento y la indignación, el gobierno respondió con una estrategia de resistencia, generando divisiones y desgaste en los manifestantes. Desde temprano abrió una “gran conversación nacional” a los que en principio no fueron convocados los gestores del paro, sino los empresarios y sectores políticos.<sup>29</sup> Con esta estrategia, fue desgastando a los manifestantes y generando algunas divisiones y tensiones al interior de los promotores del paro, particularmente entre estudiantes y sindicalistas (Duque, 2020). Desde finales del mes de noviembre, ya era evidente que el gobierno jugaba al desgaste y que en las mesas de conversación, no se negociaba nada (Antequera, 2019). En enero de 2020 las manifestaciones y las conversaciones se reactivaron, pero cada vez con mayor participación ciudadana y, por el contrario, con más tensiones al interior de los participantes. Las últimas movilizaciones fueron convocadas por docentes en el mes de febrero, pero ya no contaron con participación de la diversidad de sectores que antes se hicieron sentir gracias a la pluralidad de voces e iniciativas. ¿Triunfó el gobierno?

En una mirada de corto plazo, efectivamente el gobierno habría logrado desvanecer la protesta social. No obstante, los procesos políticos en Colombia no tienen el carácter disruptivo que tienen en otras sociedades. Como hemos visto, de hecho, las mismas políticas neoliberales no se aplicaron en nuestro país con el carácter de políticas de *shock*, como en otros países de América Latina, sino a través del gradualismo. Lo mismo ha sucedido con el proceso de declive del sistema político (del clientelismo). El contexto inmediato de desarrollo de las manifestaciones favoreció al gobierno, pero como hemos mencionado, esta es apenas una de las manifestaciones de una crisis orgánica del sistema político edificado sobre los factores que hemos expuesto en estas páginas. Esto hace que buena parte de la ciudadanía ya no esté dispuesta a tolerar los modos de apropiación privada de lo público y es cada vez más crítica de la ilegalidad y la violencia que articula estas formas de apropiación, que han conducido a la reproducción del autoritarismo con elecciones, que hemos descrito. Ahora bien, el hecho de que estas manifestaciones abran la posibilidad de profundizar el proyecto democrático también depende de cómo se gestionen y logren las articulaciones necesarias para tal fin; esto es, de los mismos actores que han participado en estos procesos y su capacidad para negociar entre sí y proyectar políticamente el descontento. Esto significa que se abre una posibilidad para que nuevos actores, de izquierda y centro que, como vimos vienen de un proceso de ascenso sin precedentes en la historia de Colombia, impulsen un proyecto de democratización de la acción política, disputando el espacio de las redes clientelares en los ámbitos locales, regionales y nacionales, que

---

que despertaron las movilizaciones. Para la autora, esto abre la posibilidad de pensar en un nuevo país, construir agendas ciudadanas de corto mediano y largo plazo, para fortalecer la democracia colombiana.

29. Para mayor información sobre el desarrollo de esta “Conversación” anunciada por el gobierno, ver: BBC, 2019b; *Semana*, 2019; *AL*, 2019c; *El País*, 2019.



no dudan en hacer uso de la violencia para sacar del camino a aquellos que desafían su poder. Por ahora esto no se ve tan claro, pues las mismas dinámicas de desarrollo de las fuerzas políticas alternativas se han caracterizado por el faccionalismo y el personalismo.

Los movimientos y organizaciones sociales han demostrado capacidad de resistencia y mucha imaginación y creatividad para desnudar al poder autoritario de los gobernantes. Los escándalos de corrupción, el asesinato de miles de líderes sociales, el narcotráfico y la violencia, el clientelismo, junto con la desigualdad y la pobreza (los temas económicos en general), se han convertido en parte de la agenda ciudadana, más allá de los movimientos y organizaciones sociales y partidos políticos alternativos. Millones de ciudadanos están viendo estos problemas como la raíz, con múltiples ramas, de lo que los analistas políticos llaman una democracia deficitaria y nosotros hemos llamado autoritarismo con elecciones.

Para el 21 y 22 de marzo, se habían convocado nuevas marchas y las expectativas de grandes movilizaciones estaban vivas. Los escándalos de compra de votos para el presidente Duque, desatados por la filtración de conversaciones entre un político local vinculado con el narcotráfico y el paramilitarismo de la Costa atlántica, se habían sumado a la larga lista de motivos para el descrédito del gobierno. Un gobierno que por encima de la movilización social y con la estrategia del desgaste, impuso una reforma tributaria que le otorgó más prerrogativas a las grandes empresas nacionales y extranjeras, por encima del bienestar de los trabajadores. Pero en este caso también, el terrible contexto mundial terminó por beneficiarlo, por ahora.

A mediados de marzo se desató la crisis sanitaria por el COVID-19, con las consiguientes medidas de aislamiento social. En el marco de estas medidas, la información sobre el fraude electoral en las elecciones de 2018, los vínculos del gobierno y sus allegados con paramilitares y narcotraficantes, no ha parado, así como sobre el asesinato de líderes sociales que no se detiene. La ciudadanía, ha asumido responsablemente el aislamiento, incluso por encima de las medidas del gobierno que también ha manejado torpemente la crisis, al pensar primero en la economía y en la estabilidad del gran capital antes que en los ciudadanos. Tendremos que esperar los acontecimientos, por ahora, para ver cómo evoluciona el proyecto democrático. La crisis sanitaria ha mostrado también, en su rostro más aterrador, las consecuencias de años de neoliberalismo y privatizaciones que han dejado a millones de seres humanos con serias dificultades para subsistir en un ambiente como el actual, privados de derecho a servicios dignos de salud. Las clases medias han visto también, con mayor claridad, su propia vulnerabilidad, derivada de las políticas de flexibilización laboral y de vivir "al debe". El aislamiento ha hecho que miles de pequeños y medianos empresarios, así como millones de trabajadores de contratos por prestación de servicios vean con mucha incertidumbre el futuro de su bienestar. La democracia es un proyecto, cuya profundización, está, como nunca en juego.

## Bibliografía

- Ahumada, Consuelo  
2020. "Colombia 21N: Estallido social al ritmo de cacerolazo". *Boletín Nuestra América XXI. Desafíos y alternativas*. N° 39. CLACSO. Recuperado de: <<https://bit.ly/2XVO-ppA>>.
- Aguirre, Mariano  
2020. "La realidad detrás de los asesinatos de líderes sociales en Colombia". *RFI*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2MGd10B>>.
- Antequera, José  
2019. "9 días de Paro Nacional ¿Qué puede venir ahora?". *VIVA*, Edición 663. Recuperado de: <<https://bit.ly/3cQ6ivz>>.
- Archila, Mauricio.  
2012. "Luchas laborales y violencia contra el sindicalismo en Colombia, 2002-2010 ¿Otro daño "colateral" de la Seguridad Democrática?". *Revista Controversia*, N° 198, junio. Bogotá. Recuperado de: <<https://bit.ly/2Xmp0l6>>.
- Bergquist, Charles  
2017. "La izquierda colombiana: un pasado paradójico, ¿un futuro promisorio?". *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No. 44. Vol. 2. Recuperado de: <<https://bit.ly/300QOSS>>.
- Blanco, Jorge  
2013. "Estructuras clientelares y partidos políticos. Aproximaciones a la crisis y transformación de los sistemas de partidos en Colombia y Venezuela". *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, Vol. 8, N° 1, enero-junio. Recuperado de: <<https://bit.ly/3eV-ZUEk>>.
2008. "La democracia colombiana en el discurso de la Prensa: El Tiempo, 1990-2004. La democracia amenazada". *Revista Administración & desarrollo*. N° 45. ESAP. Bogotá.
- Bushnell, David  
1994. "Las elecciones en Colombia: siglo XIX". *Revista Credencial Historia*, N° 50. Recuperado de: <<https://bit.ly/2AzQ9g8>>.
- Cabrera, Mauricio  
2010. "Aumento de la desigualdad en la era Uribe". *Portafolio*. Recuperado de: <<https://bit.ly/3hc1lew>>.
- Camacho, Álvaro  
2001. Democracia, exclusión social y construcción de lo público en Colombia. En *Exclusión social y construcción de lo público en Colombia*. Valencia, Alberto (Ed.). CIDSE-CEREC. Bogotá.
- Cameron Maxwell  
2010. "The State of Democracy in the Andes: Introduction to a thematic issue of Revista de Ciencia Política". *Revista de Ciencia Política*, Vol. 30, N° 1. Santiago. Recuperado de: <<https://bit.ly/2yV9mlR>>.
- Cano, Laura  
2020. "Continúa en caída libre la imagen del Presidente". *PARES*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2XKiDwW>>.
- Cembrano, Santiago  
2019. "El paro en Colombia va ir más allá del jueves 21 y otras predicciones según la big data". *VICE*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2zgbj9g>>.
- Comando Nacional Unitario  
2016. "¡Exitoso paro el 17 de marzo!". *Colectivo de Abogados*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2XKmt9n>>.
- Cruz, Edwin  
2016. "El ciclo de protesta 2010-2016 en Colombia. Una explicación". *Jurí-*

*dicas CUC*, Vol. 12, N°1. Recuperado de: <<https://bit.ly/2Yqv3cL>>.

2009. "Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia: tras las huellas del proyecto político". *Ciencia Política*, Vol. 4, N° 8. Recuperado de: <<https://bit.ly/2ME-Gwjf>>.

Duque, Javier

2019. "Democracia electoral fraudulenta. La trashumancia electoral como estrategia para ganar elecciones locales en Colombia". *Estudios Políticos* (Universidad de Antioquia). Recuperado de: <<https://bit.ly/2UnpQB7>>.

2019. "La oposición partidista en Colombia 2010-2018. Radicalización de derecha y confrontación de izquierda. Fórum, *Revista Departamento Ciencia Política*, N° 16, Recuperado de: <<https://bit.ly/2zcAl-Qe>>.

2012) "La subpoliarquía colombiana. Deficiencias estatales, democracia deficitaria". *Desafíos*, Vol. 24, N°1. Universidad del Rosario, Bogotá. Recuperado de: <<https://bit.ly/3cO-eTi9>>.

Duque, Tatiana

2020. "Los jóvenes del paro se dividen frente a conversación de Duque". *La silla vacía*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2MKyiGh>>.

Echandía, Camilo

2001. "La violencia en el conflicto armado durante los años 90". *Revista Opera*, N° 1. Vol. 1, Recuperado de: <<https://bit.ly/3hbagCy>>.

Gamboa, Laura

2019. "El reajuste de la derecha colombiana. El éxito electoral del uribismo".

*Colombia Internacional*, N° 99. Recuperado de: <<https://bit.ly/2A4q-BrX>>.

Garay, Luis

1999. *Construcción de una nueva sociedad*. Cambio y Tercer Mundo Editores. Bogotá.

Garay, Luis y Salcedo, Eduardo

2018. *El gran libro de la corrupción en Colombia*. Planeta. Bogotá.

García, Martha

2017. "40 años del Paro Cívico Nacional de 1977". *Revista Cien Días*. N° 91. Recuperado de: <<https://bit.ly/3eVvYIG>>.

García, Lizeth

2019. "Más de 300 personas capturadas por violar toque de queda en Bogotá y Cali". *RTVC*. Recuperado de: <<https://bit.ly/3dQBukl>>.

Gilhodes, Pierre

1993. Sistema de partidos y Partidos políticos en Colombia. En *Modernidad, Democracia y Partidos Políticos*. O. Delgado, F. Gonzáles y otros. FIDEC-FESCOL. Bogotá.

Gómez, Diana

2020. "Colombia en movimiento: reflexiones sobre las movilizaciones en torno al 21N". *Cider*. Recuperado de: <<https://bit.ly/3cNeIDQ>>.

Gutiérrez, Francisco

2015. "¿Una historia simple?". Centro Nacional de Memoria Histórica. Colombia. Recuperado de: <<https://bit.ly/30pT4mD>>.

2007. *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002*. Norma. Bogotá.

2002. Historias de democratización anómala. El Partido Liberal en el Sistema Político Colombiano desde el

- Frente Nacional hasta hoy. *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*. Gutiérrez, Francisco (Ed.). Norma. Bogotá.
- Guzmán, Carlos; González, Roberto y Eversley, Francisco  
2017. "Liberalización y re-democratización. De la representación a la participación política en Colombia a veinticinco años de la Constitución de 1991". *Historia Caribe*, Vol. XII, N° 31, julio-diciembre. Recuperado de: <<https://bit.ly/3cMpPpZ>>.
- Hernández, Juan y Echeverri, Laura  
2018. "Democracia electoral en Colombia desde una visión de competencia". *El Ágora USB*, vol. 18, N° 2, julio-diciembre. Recuperado de: <<https://bit.ly/2MDPjSn>>.
- Hristov, Jasmin  
2014. *Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond*. Pluto Press. London.
- Leal, Francisco y Zamosc León (Eds.)  
1990. *Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80*. IE-PRI-UNAL-Siglo XXI Editores. Colombia.
- Leal, Francisco y Dávila, Andrés  
1990. *Clientelismo. El sistema Político y su expresión regional*. IEPRI-UNAL, Tercer Mundo Editores. Bogotá.
- Linares, Malely  
2020. "El paro nacional del 21 de noviembre de 2019 en Colombia. De la indignación a la Protesta". *Contrahistorias, Pensamiento Crítico y Contracultura*, N° 33, marzo-agosto.
- Lindsay-Poland, John  
2018. *Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community Activism*. Duke University Press. Durham-London.
- Martínez, Santiago  
2008. "Justicia y gobernabilidad en Colombia: de la Ley de Justicia y Paz a la Yidispolítica". *Latin American Studies Program*, vol. 9. University of Delaware. Newark. Recuperado de: <<https://bit.ly/2MHUDV6>>.
- Medina, Medófilo  
1997. Dos décadas de crisis política en Colombia, 1977-1997. En *La crisis sociopolítica colombiana. Un análisis no coyuntural de la coyuntura*. Centro de Estudios Sociales-UNAL (Comp.). Fundación Social, CES. Bogotá.
- Misión de Observación Electoral  
2018. "Elecciones 2018. Reglas anacrónicas para resultados demasiado inciertos". Recuperado de: <<https://bit.ly/2Af0A9h>>.
- Molano, Frank  
2010. "El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 en Bogotá. Las clases subalternas contra el modelo hegemónico de ciudad". En: *Ciudad Paz-Ando*. Vol. 3, N° 2. Recuperado de: <<https://bit.ly/3h83Sfa>>.
- Molina, Jesús  
2010. *Democracia en Colombia y poder público ¿Es público o privado el Estado en Colombia?* Escuela Superior de Administración Pública, Facultad de Investigaciones. Bogotá.
- Monterrosa, Heidy  
2018. "La economía que le entrega el presidente Juan Manuel Santos al nuevo Gobierno". *La República*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2XPtTZc>>.
- Montes, Óscar  
2019. "La Ley del Montes|El temido 21N". *El Herald*. Recuperado de: <<https://bit.ly/2Ym5XLZ>>.
- Múnera, Leopoldo  
1998. *Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia*

- 1968-1988. IEPRI-Universidad Nacional de Colombia-CEREC. Bogotá.
- Murillo, Gabriel y Osorio, Fredy  
2007. La calidad de la democracia Colombiana: perspectivas y limitaciones. *América Latina Hoy*. N°45. Universidad de Salamanca. Recuperado de: <<https://bit.ly/2MTaRLf>>.
- Nocua, Diana  
2019. "Violencia sociopolítica contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el postconflicto: dificultades y retos para la implementación de una paz estable y duradera en Colombia". *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*. Vol. 30, N°1. Recuperado de: <<https://bit.ly/2XJF1qf>>.
- Pachón, m.  
2010. Reforma Institucional en Colombia: El vía crucis entre el equilibrio de la gobernabilidad y la representación (1991-2006). En *Desafíos de la gobernabilidad democrática: reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andina*. Tanaka, Martín y Jácome, Francine (Coords.). Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
- PARES  
2018. "Así se roban las elecciones en Colombia". Recuperado de: <<https://bit.ly/3dGaoHT>>.
- Parra, Esther y Guevara, Eduardo  
2017. "Multipartidismo y Gobiernos de Concertación en Colombia (1998-2016)". *Espacios Públicos*, Vol. 20, N°50, septiembre-diciembre. Universidad Autónoma del Estado de Toluca. México. Recuperado de: <<https://bit.ly/2MDCNT9>>.
- Pizarro, Eduardo  
2018. "Colombia: Un tsunami político". *Nueva Sociedad*, N° 276, julio-agosto. Recuperado de: <<https://bit.ly/3cl8c15>>.
1990. La insurgencia armada en Colombia: raíces y perspectivas. En *Al filo del Caos. Crisis política en la Colombia de los años 80*. Leal, Francisco y Zamosc, León (Eds.). Tercer Mundo Editores, UN. Bogotá.
- Romero, Mauricio  
2004. Democratización política y contra reforma paramilitar en Colombia. En *Violencias y Estrategias Colectivas en la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela*. Sánchez, Gonzalo y Lair, Eric (Eds.). IFEA, IEPRI, Norma. Bogotá.
2003. *Paramilitares y Autodefensas. 1982-2003*. IEPRI-Universidad Nacional-Editorial Planeta. Bogotá.
- Rueda, Juan  
2019a. "La larga noche en Cali: toque de queda bajo zozobra y vandalismo". *El Tiempo*. Recuperado de: <<https://bit.ly/37itz85>>.
- 2019b. "Noche de tensión en Cali durante toque de queda tras el paro". *El Tiempo*. Recuperado de: <<https://bit.ly/3f8LLEa>>.
- Sandoval, Mary  
2018. "Desinstitucionalización del sistema de partidos en Colombia: reformas políticas y consecuencias sobre los pequeños partidos de izquierda". *Izquierdas*, N° 42, octubre. Santiago. Recuperado de: <https://bit.ly/3f4W1wW>.
- Salazar, Hernando  
2010. "Colombia: el legado económico de Uribe". *BBC*. Recuperado de: <<https://bbc.in/2AXL1Te>>.

Tanaka, Martín

2008. De la crisis al derrumbe de los sistemas de partidos, y los dilemas de la representación democrática: Perú y Venezuela. En *La crisis de la representación democrática en los países andinos*. Mainwaring, Scott; Bejarano, Ana y Pizarro, Eduardo (Eds.). Norma. Bogotá.

Tovar, Leonardo

2020. La Fractura: Una lectura de las recientes movilizaciones sociales en Colombia. En *Luchas sociales, justicia contextual y dignidad de los pueblos*. VV.AA. Ariadna Ediciones, Santiago.

Ungar, Elisabeth y Cardona, Juan

2010. ¿Hubo una bancada parapolítica? En *Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. López, Claudia (Ed.). Editorial Debate. Bogotá.

Vargas, Alejo

2015. Las relaciones civiles-militares en Colombia (de la indiferencia y la subordinación formal hacia una mayor subordinación real. En *El laberinto de la seguridad ciudadana. Bandas criminales, seguridad de fronteras y regímenes penitenciarios en América Latina*. : Zabaleta, Alfredo (Coord.). Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez-CLACSO. Buenos Aires.

Velasco, Juan

2017. "El voto uribista en los municipios colombianos. Patrones y significados (2002-2014)". *Análisis Político*, Vol. 30, N° 89, enero-abril. Recuperado de: <<https://bit.ly/3f8Fg4g>>.

Velásquez, Edgar

2007. Historia del paramilitarismo en Colombia. *História, São Paulo*, Vol. 26, N° 1. Recuperado de: <<https://bit.ly/3dPl4ns>>.

Zúñiga, Marjorie

2012. "El declive del sindicalismo en Colombia y sus consecuencias frente al conflicto colectivo". *Revista de Derecho*, julio.

### Periódicos - recursos digitales

AIL

(9/10/2019a). "El Paro Nacional del 21 de noviembre será contra las reformas laboral y pensional que anunció el Gobierno". Recuperado de: <<https://bit.ly/2BRA0DF>>.

(8/11/2019b). "Las 10 razones del paro nacional del 21 de noviembre". Recuperado de: <<https://bit.ly/2MHRGID>>.

(2/12/2019c). "El Paro Nacional significa esperanza para el país, según reciente encuesta". Recuperado de: <<https://bit.ly/37eED6i>>.

BBC

(22/11/2019a). "Paro nacional en Colombia: 4 motivos detrás de las multitudinarias protestas y cacerolazos en Colombia contra el gobierno de Iván Duque". Recuperado de: <<https://bbc.in/37ez33K>>.

(23/11/2019b). "Protestas en Colombia: Duque saca el ejército a la calle y llama a una "conversación nacional". Recuperado de: <<https://bbc.in/2UuZxjn>>.

Colombia Informa

(21/11/2019). "Paro continúa: ¡Cacerolazo en contra de la represión policial!". Recuperado de: <<https://bit.ly/3hITelc>>.

El País

(8/12/2019). "Dos semanas de paro nacional, ¿por qué no hay avance en las negociaciones?". Recuperado de: <<https://bit.ly/30qilrj>>.

Noticias Caracol

(23/11/2019). "El balance que dejó el toque de queda en Bogotá y Cali". Recuperado de: <<https://bit.ly/2UnazjN>>.

Semana

(24/11/2019). "¿Explotó la olla?". Recuperado de: <<https://bit.ly/30saHCy>>.

## Clases medias, más allá de los mitos

285  
ENERO-FEBRERO 2020

COYUNTURA: **Steven Levitsky / María Victoria Murillo.** La tentación militar en América Latina. **Roberto Gargarella.** Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile.

TRIBUNA GLOBAL: **Marie Lemonnier.** ¿Europa sigue siendo cristiana? Entrevista a Olivier Roy.

TEMA CENTRAL: **Ezequiel Adamovsky.** «Clase media»: mitos, usos y realidades. **Cecilia Güemes / Ludolfo Paramio.** El porvenir de una ilusión: clases medias en América Latina. **Gabriela Benza / Gabriel Kessler.** Nuevas clases medias: acercar la lupa. **Moisés Kopper.** Brasil: ¿cómo se «inventó» la nueva clase media? **Tobias Boos.** Rebelión, progresismo y economía moral. La clase media argentina en las últimas dos décadas. **Víctor Arrambide Cruz.** Conceptos e ideas sobre las clases medias peruanas. **Mayra Espina.** Reforma y emergencia de capas medias en Cuba. **Amaru Villanueva Rance.** Bolivia: la clase media imaginada. **José Fernández Vega.** Ricardo Piglia: una vida en tercera persona.

---

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datos para el pago a <info@nuso.org> o <distribucion@nuso.org>.

---

286 En nuestro próximo número  
**Protestas globales**